

---

# Cuba: ¿vientos de cambio o coyunturas huracanadas?

## ARMANDO CHAGUACEDA NORIEGA

Politólogo e historiador cubano, miembro de la cátedra Haydeé Santamaría de la Asociación Hermanos Saíz, ex becario ASDI y profesor del Campus Virtual de CLACSO.

---

### Resumen

El autor considera que es necesario introducir modificaciones importantes en el modelo de propiedad estatal centralizada. Ante la previsión de que Cuba y el Caribe se verán afectados por huracanes cada vez más fuertes y la necesidad de lograr la seguridad alimentaria en la isla cree que habría que recurrir más a la participación popular y a reformas que se apoyen en ésta, para reforzar las instituciones y la gobernabilidad.

### Abstract

The author considers necessary the introduction of significant changes in the model of centralized state's property. Faced with the forecast that Cuba and the Caribbean will be affected by increasingly strong hurricanes and the need to achieve food-supply security on the island he believes it is advisable to resort more to the popular participation and reforms supported on it, to reinforce institutions and governance.

### Palabras clave

Seguridad alimentaria, participación ciudadana, centralización económica, consultas.

### Keywords

Alimentary security, citizen participation, economic centralization, consultancy.

### Cómo citar este artículo

Chaguaceda Noriega, Armando 2009 "Cuba: ¿vientos de cambio o coyunturas huracanadas?" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año X, Nº 25, abril.

---

En la actual coyuntura cubana este autor sostiene que las soluciones sostenibles, democráticas, y cabalmente socialistas, deben ir de la mano con una ampliación de la participación política y no en la lógica de la contención del potencial popular. Un proyecto no capitalista e independiente, que incluya simultáneamente contenidos nacionales, clasistas y de otro tipo, supone la redistribución de poderes, la definición de actores con bases políticas propias y autonomía relativa

para el ejercicio político; así como interfases socio estatales de calidad. Precisa, además, resolver la acumulación de problemas estructurales que laceran, en sus expresiones concretas, la cotidianeidad de los ciudadanos: la incapacidad del asalariado estatal de garantizar sus niveles de consumo, la obsolescencia del modelo de propiedad estatal centralizada, visible en los modos de organización y gestión de la mayoría de sus empresas y la frágil seguridad alimentaria de la isla, entre otros desafíos.

**“En los últimos años (...) se han acumulado factores adversos derivados del impacto de la agresividad estadounidense, del diseño obsoleto del sistema económico y de las restricciones de un esquema de participación ciudadana fundamentalmente movilizado-consultivo”**

Cualquier intento de construcción de escenarios supone identificar las variables estratégicas a investigar, así como el objeto y temporalidad de prospectiva. Un posible objeto ampliado de investigación (no asumido en esta entrega) podría ser el análisis de la capacidad del sistema político cubano para cumplir coherentemente los objetivos declarados del discurso oficial, y las demandas ciudadanas, mediante ponderación de variables como la resiliencia, adaptabilidad, eficiencia y legitimidad<sup>1</sup>. En ese sentido, un equipo de investigadores bien dotado de tiempo, recursos materiales y humanos, podría adelantar los contornos de posibles escenarios de mediano plazo (hasta cinco años), aportando insumos para la reflexión estratégica de diferentes actores, de manera que permitan explorar los contextos de evolución político-institucional cubanos. Sin embargo este trabajo, ante el alud de textos esperables en la coyuntura del 50 aniversario del triunfo de 1959, prefiere centrarse como exploración acotada alrededor de la relación entre las reformas (objeto privilegiado, junto al balance histórico, de la mayoría de los actuales análisis), el estado de la gobernabilidad (problemática politológica trascendente) y los retos de la seguridad alimentaria (articulando, entre otras, aristas ambientales y de desarrollo humano) en el contexto del terrible ciclo de desastres naturales (huracanes) que azotó la isla desde fines del tercer trimestre del 2008.

Para definir los elementos que determinan el cambio político es imprescindible considerar factores disímiles que abarcan los grados de consenso existentes dentro de la clase política, el papel de institutos armados, acciones de EEUU y otros actores (Unión Europea, Rusia, China), el apoyo de gobiernos y fuerzas políticas aliadas, los comportamientos y capacidades de articulación e incidencia de la ciudadanía (aceptación pasiva, expresiones de colaboración activa, resistencia y disenso intrasistémico o ruptura), entre otros. Y por supuesto las expresiones de cultura y socialización políticas, toda vez que la visión de los actores es importante y construye realidad.

Ciertamente, el nuevo liderazgo político nacional cubano tiene ante sí un conjunto de desafíos complejamente articulados. Coincidiendo con una noción internacionalmente difundida del buen desempeño político<sup>2</sup>, éste parece reconocer con pre-

ocupación que los aspectos institucionales son esenciales, y la viabilidad y el equilibrio de su respectivo ordenamiento no dependen exclusivamente del buen diseño de las instituciones sino de la manera en la que se elabora ese diseño y del modo en que se pone en práctica. En los últimos años, junto a los reconocidos índices sociales de Cuba, se han acumulado factores adversos derivados del impacto de la agresividad estadounidense, el diseño obsoleto del sistema económico y las restricciones de un esquema de participación ciudadana fundamentalmente movilizador-consultivo.

En un escenario de virtual estancamiento la élite política ha hecho público y visible su interés de proceder a un fortalecimiento institucional –hacer efectivo su funcionamiento, aplicar la legalidad al desempeño del funcionariado y el comportamiento ciudadano, reducir el tamaño del aparato burocrático-, a la reconstrucción de consenso en torno a propuestas del discurso oficial (justicia social, soberanía nacional), solucionar asignaturas pendientes (crecimiento económico, demandas de movilidad, libertades personales, debate público y participación renovada) y continuar una política de reinserción regional y mundial (aplastante condena en la ONU a la guerra económica de EEUU) y fortalecimiento de los vínculos con aliados estratégicos (Venezuela, Rusia, China).

Pero la presente coyuntura no puede ser más compleja. Actualmente Cuba atraviesa una difícil situación tras el devastador paso, en apenas 10 días, de dos poderosos huracanes y la adición de un tercero a inicios de noviembre. Estos barrieron prácticamente todo el territorio nacional (poblado por 11 millones de habitantes distribuidos en 110.000 km<sup>2</sup>), dejando pérdidas calculadas en 10 mil millones de dólares (un 35% del Producto Interno Bruto –PIB-), más de 300 mil viviendas afectadas, una agricultura en ruinas, etc. Satisfactoriamente el sistema de defensa civil garantizó la mínima pérdida de vidas, la protección de poblaciones vulnerables y el funcionamiento de servicios básicos esenciales. Sin embargo, aun con la combinación de reservas estatales y la asistencia internacional, no existen hoy suficientes recursos para garantizar las necesidades de todo tipo de los ciudadanos cubanos. El nuevo gobierno asume el desafío de responder a las demandas de una población que hasta el momento le otorga un voto de confianza amplio pero nunca ilimitado.

El presente texto forma parte de un análisis aún en curso, que va combinando volúmenes crecientes de información (tendientes a reorientar y revisar suposiciones previamente fundadas) y herramientas investigativas. En este ejercicio he tenido un acceso diferenciado a las clásicas fuentes de información de los escenarios: mucho más al testimonio ciudadano; algo del conocimiento experto (incluyendo el uso de fuentes periodísticas) y casi nada de élites, salvo lo que reflejan las propias estrategias elegidas y las comparecencias de los dirigentes en los medios. En este estudio elegí dos variables que cubren una dimensión esencialmente política (governabilidad) y otra socioeconómica y ambiental (seguridad alimentaria).

La “seguridad alimentaria” (SA), concepto impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), refiere un estado satisfactorio de disponibilidad y acceso (físico y económico) de alimentos nutritivos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de la población. La SA abarca cuatro dimensiones: disponibilidad (producción interior, capacidad de importación, de almacenamiento y ayuda alimentaria); acceso a los alimentos o capacidad para adquirirlos (disponibilidad de éstos para toda la

población, física y económicamente, en el momento oportuno); estabilidad de la oferta (independiente de las variaciones climáticas y sin excesiva variación de los precios, además del hecho de que se cuente con productos alternativos en función de las variaciones estacionales) y salubridad, buena calidad e inocuidad de los alimentos (higiene, principalmente acceso al agua).

La SA se relaciona con las llamadas “buenas prácticas agrícolas” (BPA), relativas, entre otros factores, al uso de pesticidas y el control de plagas; así como la higiene en la manipulación de alimentos. La preponderancia de cada una de las dimensiones mencionadas varía en función del área geográfica referida: en los países en desarrollo la preocupación está en la disponibilidad, el acceso y la estabilidad.

Como otra variable asumimos un concepto de gobernabilidad, definida como aquel estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad del sistema político para responder a ellas de manera legítima y eficaz<sup>3</sup>. Como cualquier realidad ofrece un conjunto de escenarios posibles, previsibles y, menos aún, deseables, por donde discurre la agencia humana; considero que los sistemas políticos establecen realmente las pautas de su gobernabilidad considerando siempre algo así como un coeficiente tolerable de corrimiento de la norma, llenado por la regulación informal, que siempre existe y actúa. Sólo cuando este desborda ciertos límites es cuando la institucionalidad deviene disfuncional y la gobernabilidad se erosiona a niveles peligrosos. Asumo pues que la gobernabilidad en estado puro no existe, solo gradaciones de mejor o peor desempeño.

¿Qué relación establecer entre gobernabilidad y seguridad alimentaria? Se reconoce que en el área de la SA las demandas (y las deficiencias más acuciosas) de la gobernabilidad todavía se ubican en relación con el Estado-nación. Es un hecho que en aquellos países del tercer mundo donde las instituciones han tenido buenos desempeños, el hambre ha sido reducida significativamente. En ese sentido y aunque se hable de gobernabilidad democrática, la relación entre ésta y la SA no presupone la inviabilidad de otras experiencias. Gobiernos no demoliberales (China, o Corea del Sur y Taiwán hasta los setentas), también han podido rescatar del hambre a gran cantidad de personas en forma rápida.

Cuando se trata de reducir la pobreza y el hambre, el punto de partida más importante en la evaluación de una buena gobernabilidad a nivel nacional es la capacidad del gobierno para satisfacer las necesidades públicas básicas de todos sus ciudadanos, incluyendo los que viven en las áreas rurales. Hacerlo promoviendo la paz interna y la justicia, supone mantener niveles decentes de inversión pública en la infraestructura rural, el apoyo gubernamental a la investigación agraria y a los productores, la canalización efectiva de la ayuda extranjera, etcétera<sup>4</sup>.

### **Presentando el contexto**

Arena de pasiones encontradas, mitos ideológicos y conquistas sociales, Cuba conmemorará en enero el medio siglo del histórico triunfo de 1959. Y lo hará ataviada con realidades contrastantes. La isla es el único país de América Latina cumplidor de las metas del Milenio de la ONU, cuenta con la mortalidad infantil más baja del hemisferio (7 por cada 1000 nacidos vivos) y una expectativa de vida de 78 años,

posee un 99% de los niños escolarizados, la mitad de su población entre 18 y 25 años incorporada a la educación superior, y cobertura de salud y seguridad social universales. Los niveles de desigualdad son acotados y se apoya a las regiones y familias más vulnerables. Además el mayoritario control nacional (léase estatal) de recursos naturales y económicos fundamentales le permite diseñar y aplicar márgenes relativamente amplios de políticas de desarrollo autóctonas. La psicología y cultura popular nacionales reivindican valores como la equidad, solidaridad, la dignidad y el espíritu emprendedor; reforzados en su mayoría por políticas de revolución.

Sin embargo, la isla enfrenta desafíos mayúsculos: desde hace 30 años no garantiza su reemplazo poblacional de largo plazo, y desde el 2006 la población cubana decrece y envejece ante el efecto combinado de la baja natalidad (hija del alto nivel educativo), la buena cobertura médica, el peso de las dificultades económicas y una migración con énfasis en jóvenes calificados. Existe un 20% de pobreza urbana y una extensión del subconsumo; pulula una amplia economía informal y el irrespeto de una legalidad frecuentemente interpretada como ilegítima por una ciudadanía carente de cultura jurídica. El interés de institucionalizar los procesos choca con el hasta ahora amplio ejercicio discrecional de decisiones ejecutivas y la (con) fusión entre el Partido Comunista, el Estado y el Gobierno; con una cultura de gestión política centralizada y verticalista, que ha estimulado poco el desarrollo efectivo de los poderes populares locales y restringido la relativa autonomía de las diversas instancias de administración pública. El pueblo cubano percibe al gobierno de Estados Unidos como una amenaza histórica a la independencia nacional y una gran cantidad de personas ve en cambio a la sociedad de ese país como horizonte de vida deseable.

### **Antecedentes de la actual coyuntura**

Durante el período que va de agosto de 2006 a febrero de 2008 fue efectuado sin sobresalto el relevo de liderazgo, las funciones de mando están más repartidas y el presidente Raúl Castro impulsa un fortalecimiento de la institucionalidad, dirigido por el Partido Comunista. Los cambios son necesarios particularmente para un 70% de los 11 millones de cubanos nacidos después de 1959, con énfasis en los tres millones de habitantes menores de 20 años, para los que la crisis material y sus efectos morales constituyen “su vida”.

El saldo de la etapa de traspaso de mando se expresó en un conjunto de decisiones puntuales: la adopción de algunas medidas prácticas, como ajustar las inversiones de la “Batalla de Ideas”<sup>5</sup>; el pago de deudas estatales a campesinos privados y la elevación hasta en un 250% de los precios “de acopio” que paga el Estado por la leche y carne producidas por aquéllos; cierta flexibilización de la política aduanera para permitir la importación individual de artículos electrodomésticos. Se produjo el anuncio de una perspectiva de reforma salarial que eliminaría topes a ingresos devengados. Sin embargo otras demandas populares (fin de restricciones a viajes al exterior de los ciudadanos, más espacio para la iniciativa personal, etc.) durmieron el sueño de los justos<sup>6</sup> cumpliéndose el levantamiento de prohibiciones relativas al acceso a los hoteles; al servicio de comunicación celular

y a la venta de varios tipos de bienes de consumo. Desde diversas ópticas estas “aperturas” han sido frecuentemente valoradas desde enfoques polares (apuesta de la libertad personal con énfasis en derecho formal versus defensa de una equidad social anclada en la capacidad efectiva de realizar) revelando la necesidad de un marco de creación y ejercicio de derecho con participación ciudadana y del control de acciones discrecionales funcionariado<sup>7</sup>.

Durante la etapa se emprendieron algunas inversiones industriales (rama petroquímica), la rehabilitación de acueductos y viales, acometidas hidráulicas en las provincias orientales y otras; se impulsó la distribución territorial de leche a la población, hubo un sensible mejoramiento del transporte por ómnibus en la capital (tras un histórico “toque de fondo” en el 2007) y se apreció cierta recuperación en sector de la salud, la gastronomía y el comercio. Sin embargo continuó restringida la oferta de la libreta de racionamiento (válida para cubrir por 15 días<sup>8</sup> las necesidades básicas de alimentación), se mantuvo el estancamiento de los ingresos personales reales (cada familia destina actualmente a la alimentación casi el 80% de sus ingresos personales), mientras el modesto incremento salarial de fines del 2005 fue reducido por un simultáneo aumento de la tarifa de electricidad para el ahorro energético.

En la esfera del debate, el sano impulso otorgado por la dirección estatal al proceso de discusión participativa de la ciudadanía, con vistas a estructurar una agenda de cambios socialista, conllevó la realización de miles de reuniones en comunidades y centros de trabajo que señalaron aquellos problemas y soluciones identificados por el heterogéneo sujeto popular. No obstante, la “captura” (no socialización) del agregado nacional por parte del aparato burocrático, y la muy acotada continuación de este estilo (en discusión de Reforma Laboral y Ley de Seguridad Social) restringieron, una vez más, el acervo empoderador de estos procesos para masas de ciudadanos<sup>9</sup>. En similar sentido, apunta la anunciada reestructuración de los organismos de la Administración Central del Estado, sobre los cuales no ha habido más información, lo que evidencia las restricciones a la participación popular en la toma de decisiones sobre asuntos de su máximo interés<sup>10</sup>.

Para algunos autores se estaría produciendo un aumento simultáneo del control sociopolítico y represión a ilegalidades y de la emergencia de expresiones de debate beligerante en los espacios institucionales oficiales<sup>11</sup>. Según este enfoque los debates combinan mecanismos de control, camuflados tras una retórica que reitera una mayor permisibilidad ante la crítica y la discusión, con aperturas limitadas sobre asuntos culturales específicos, otrora censurados, y la continuidad de reuniones tradicionales con agendas impuestas por el gobierno (Ej. Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba –CTC– en septiembre de 2006)<sup>12</sup>.

### **La situación económica**

Concretamente, la economía cubana ha sufrido este año deterioros significativos, producto del incremento del precio de los alimentos (1000 millones adicionales) y el petróleo importados, la disminución del principal producto exportable (níquel), traduciéndose en desequilibrios en la balanza de pagos<sup>13</sup>, aumento de la deuda externa (14,3% en 2007) y sus intereses, en una economía dependiente de la im-

portación de insumos intermedios y de bienes de capital. Enfoques realistas anunciaban para 2008 un crecimiento cercano al 5%. Todo ello incide en el crecimiento de los precios internos, decidido por el gobierno, con traspasos significativos de alzas en combustible hacia los precios de productos agropecuarios, servicios de transporte privado y otros precios no regulados.

En esta coyuntura resalta la necesidad expresada por académicos (P. Monreal, P. Vidal, O Everleny) y políticos (Raúl Castro) de acometer cambios estructurales, que modifiquen las bases materiales y organizativas del funcionamiento de la economía, así como su especializada inserción internacional. Este proceso de reestructuración debería:

- a. redefinir las bases materiales de acumulación (proporciones entre el consumo y la inversión; el tamaño relativo y el papel de diferentes sectores como la agricultura, la industria y los servicios; y la prioridad concedida a distintas ramas de la economía);
- b. reinsertar al país en la economía internacional (con una nueva especialización);
- c. reformar el sistema económico (definiendo el papel del mercado, la regulación estatal de las formas de propiedad y la organización empresarial).

Una reforma parece ser condición inicial para poder avanzar hacia esos cambios estructurales<sup>14</sup>. Se considera ineficaz una estrategia de desarrollo nacional, a pesar de contar con activos productivos (capital humano) e indicadores sociales (altos niveles de educación y salud) potencialmente favorecedores del desarrollo, que siga esperando la solución en ciertas medidas de políticas económicas que se aplicarían de manera “puntual” y gradual. El problema económico de Cuba radica en que el sistema económico vigente no puede servir como punto de partida para el desarrollo y que los mecanismos que conducen a éste (como, por ejemplo, los “cambios estructurales”) no pueden operar con eficacia en la situación actual, por lo que la misma debe transformarse mediante una reforma económica sustantiva que anteceda al resto de los cambios<sup>15</sup>.

Los huracanes, por su parte, vienen a agravar todo este escenario e inciden sobre el desenvolvimiento del PIB y la estabilidad monetaria<sup>16</sup>. Los efectos negativos sobre el PIB vendrían dados, fundamentalmente, por pérdida de cosechas y medios de agricultura; las consecuencias sobre el turismo y la producción de níquel; daños a infraestructura y medios de producción; y la reorientación de gastos hacia las actividades de reconstrucción y recuperación. La contracción de la producción nacional de alimentos por los huracanes acentuaría más la tendencia al aumento de los precios internos de los productos agrícolas. Otro desequilibrio estaría en el déficit fiscal, el cual debe ampliarse como consecuencia de las erogaciones presupuestarias necesarias para enfrentar las afectaciones de los huracanes<sup>17</sup>.

Esta situación requiere diseñar una política económica integral y coordinada, considerando los efectos inmediatos de las medidas que se tomen, sus consecuencias a largo plazo, así como las reacciones entre los sectores y mercados, incluyendo al mercado informal, donde finalmente se manifiestan los desequilibrios que el Estado no reconoce en sus espacios. Se trata de distribuir el ajuste de forma inteligente, con una política preocupada por las familias más pobres y que, igualmente, proteja

los fundamentos de la economía, aprovechando la autonomía ganada con la desdolarización de 2004, con una devaluación que sirva para reactivar la exportación y reducir importaciones, manteniendo el equilibrio monetario.

### **El estado del liderazgo**

Creo que los acuerdos básicos entre las élites dirigentes importan en tanto potencialmente pueden posibilitar una mejora de la gestión pública, y garantizar procesos de toma de decisión más transparentes y abiertos a la participación de otros actores allende las élites. Una clase dominante que garantice sus intereses como totalidad (y no meramente para una fracción de ella) debe tender a ampliar la base de su consenso, procurando la hegemonía, incluyendo demandas particulares y fragmentos de los discursos de sectores marginados. Para ello el sistema político, y en general la nación misma, deben poseer a) recursos materiales suficientes y el control de los mismos para sostener la provisión social de bienes y servicios demandados, b) un entramado normativo contextualizado al perfil de las culturas políticas más representativas e influyentes del conjunto entre las cuales la deliberación (en lugar de la violencia) tendría que ser patrón de comportamiento, c) un canal institucional para los cambios que se acompañaría por formas de acción colectiva no anti-sistémicas.

En ese sentido, la expansión de una relativa autonomía de los sectores sociales respecto a la institucionalidad política, casi monopólica como canal público de expresión de demandas, debe modificar el predominio ideológico sobre las políticas públicas de educación, cultura y el control estatal de los medios de comunicación; debe reducir el rutinarismo, la escasa reflexividad y la anomia creciente de diversos agentes respecto a la política<sup>18</sup>. Tanto un perfeccionamiento democrático del socialismo, como la defensa de los intereses populares ante una restauración capitalista (dirigida por segmentos de tecnoburocracia), supondrían el impulso a formas de contraloría social, rendición de cuentas y creación de interfases sociedad civil-Estado donde las organizaciones de la primera no sean una mera correa de transmisión de las decisiones del segundo.

En los horizontes y sentidos del cambio, algunos autores perciben un diapasón de posturas políticas que abarcarían a sectores de élite favorables a una apertura económica con control político; otros proclives a reformas económicas y ciertos cambios políticos en consonancia con América Latina; y un tercer grupo conservador partidario del inmovilismo<sup>19</sup>. A partir de estos presupuestos hoy no sería previsible una agenda de cambios claramente liberales o socializante, ni tampoco presiones y demandas abiertas por parte de la población. Las tímidas reformas acontecidas tendrían como objetivos el mejoramiento de la posición de Cuba ante el mundo (relanzamiento de relaciones con la UE, ingreso como miembro al Grupo de Río, fortalecimiento importante con Rusia y China) a lo que podríamos sumar un seguimiento cauteloso del gobierno de Barack Obama. Personalmente coincido con la valoración de los contenidos y sentidos de la actual agenda de gobierno, aunque difiera en una clasificación ideológica, siempre especulativa y problemática, de segmentos de una dirigencia claramente distinguible por su disciplinamiento bajo el liderazgo personal (no meramente institucional) de Fidel.

La necesaria y promisoría orientación latinoamericanista recibe impulsos con la entrada cubana al Grupo de Río, y el espaldarazo del gobierno brasileño (con incremento del comercio, el crédito y las inversiones) simbólicamente sancionado con la invitación de Lula a Raúl para una visita a tierras cariocas. La normalización migratoria con México, y las mejoradas relaciones con Argentina y Colombia, parecen apuntar en una dirección positiva. Sin embargo, el acercamiento Cuba-América Latina confronta varios escollos fundamentales. Primeramente las dificultades internas de los aliados (conflicto de autonomías en Bolivia, disputas electorales en Nicaragua y Venezuela); las presiones de actual crisis económica mundial que generan contradictorias movidas integracionistas; y el hecho de que los nuevos gobiernos “progresistas” de la región hablan un lenguaje diferente del discurso y la cultura política oficiales cubanos.

Claramente, existe en el liderazgo un consenso en la necesidad perentoria de sacar adelante la economía y aumentar la producción de alimentos<sup>20</sup>. Éstas y otras medidas de beneficio popular (construcción de vivienda, aumento de pensiones –limitadas en su aplicación y expansión ante las demandas acumuladas y los factores demográficos ya señalados– y cese de prohibiciones absurdas) pueden mejorar el entorno donde se ejerce la gobernabilidad, y rebajar la presión social, pero no bastan para reconstruir el monopolio estatal de asignación de recursos, valores y movilidad social de décadas pasadas, mientras las prácticas generalizadas de ilegalidad vinculadas a economías de sobrevivencia minan los fundamentos morales y la base material del poder.

Para otros autores estas “reformas de supervivencia”, emprendidas en ausencia de sectores reformistas claros, intentan relanzar el control estatal de la economía (por la vía del llamado Perfeccionamiento Empresarial) en una suerte de reforma al estilo de la Nueva Política Económica (NEP) –y no como un “socialismo de mercado” asiático– reconstruyendo un estilo de gobernabilidad autocrática<sup>21</sup>. Según esta mirada, el retraso de cambios (sugeridos más que prometidos) ha provocado un desgaste de credibilidad del grupo de sucesión, que podría reducir su capacidad de maniobra para mejorar su control efectivo de la sociedad, al punto de poder llegar a un punto de irreversibilidad<sup>22</sup>.

Más matizadas resultan las visiones que entienden la actual coyuntura como espacio de retos y oportunidades, siempre influidos por las contingencias. Como plantea un destacado politólogo cubano: “en la burocracia uno se puede encontrar personas más propensas y menos propensas al cambio, pero dentro de la burocracia en posiciones de poder hay un sector recalcitrante, que no querría ceder un ápice de poder, descentralizar, darle más participación a la gente en las decisiones”<sup>23</sup>. Asumir seriamente el estudio del fenómeno funcionariado, sin ignorar su existencia o aludirla peyorativamente, es sin dudas una senda a explorar por la sociología y ciencias políticas cubanas.

Obviamente, con un liderazgo histórico en declive, los gobernantes tendrán que desarrollar nuevos mecanismos de movilización y participación política, es decir, tendrán que establecer nuevas “reglas del juego” para lograr consenso y manejar los conflictos entre sí<sup>24</sup>. La pregunta entonces será si se radicalizarán estrategias ancladas en visiones conservadoras de “los valores históricos de la Revolución”; si se emprenderán reformas económicas al estilo chino o vietnamita; o si se reinventa, participativamente, el socialismo cubano.

El reto más subversivo, difícil y urgente es garantizar la continuidad sostenible de las grandes promesas de la Revolución (soberanía nacional, desarrollo autóctono, justicia social) imbricándolas con mayores cotas de protagonismo popular y reconocimiento de la pluralidad. Ello implica, como acertadamente dice el politólogo Rafael Hernández, director de la prestigiosa revista *Temas*, “abordar problemas de fondo, entre ellos: ampliar las formas de propiedad de los medios de producción para incluir la propiedad social y privada, fortalecer la hoy deficiente participación de los ciudadanos en las decisiones de gobierno y en el control de las políticas públicas y rearticular el consenso político en torno a un nuevo modelo de socialismo” y sobre todo aceptar que “en el socialismo, el diálogo entre los dirigentes y la opinión pública, y los cambios derivados de éste deberían ser parte de la política normal, no una campaña o una consigna para ciertas etapas de crisis. Que el proyecto socialista se renueve depende en buena medida de esa capacidad del liderazgo para interactuar con un pueblo educado, gracias a la revolución, y que por eso mismo tiene su propio criterio”<sup>25</sup>.

### **El impacto climático y los retos de una gobernabilidad con soberanía alimentaria**

Eventos climáticos extremos como los huracanes son sucesos terribles que llevan a las personas a lidiar, en primer lugar, con las consecuencias inmediatas (amenazas a la salud, daño a la propiedad o destrucción de las siembras) que suelen tener repercusiones devastadoras para el desarrollo humano. Entre los años 2000-2004 se informó un promedio anual de 326 desastres, con unos 262 millones de personas afectadas (una por cada 19 habitantes del mundo en desarrollo<sup>26</sup>).

Enmarcando una proyección de desarrollo humano, vemos que las grandes pérdidas en la producción agrícola generarán mayor desnutrición, mermarán los ingresos y reducirán las oportunidades gubernamentales de superar la pobreza de las poblaciones vulnerables. Los eventos climatológicos aumentarán los riesgos y reducirán la productividad de la agricultura de los países en desarrollo. Y en América Latina, aunque la agricultura representa un porcentaje más reducido del empleo regional y del PIB, sigue siendo la fuente de sustento de grandes cantidades de pobres.

La proyección del Panel Internacional de Cambio Climático es que los tifones y huracanes se volverán tendencialmente más devastadores, aumentando sus velocidades máximas y precipitaciones, en proporción al aumento de energía liberada por los océanos. Muchos países tienen poblaciones vulnerables a huracanes que deberán enfrentar aumentos sostenidos de los riesgos relacionados con el clima; particularmente quienes viven en zonas amenazadas (costas y deltas de ríos), existiendo unos 344 millones de personas expuestas a ciclones tropicales y 521 millones expuestas a inundaciones, con complejos vínculos entre los cambiantes patrones del clima y las tendencias del riesgo y la vulnerabilidad<sup>27</sup>.

Las islas del Caribe también están en situación de riesgo, en escenarios donde la actividad de las tormentas interactúa con factores sociales (como la rápida urbanización y la persistencia de agricultura de subsistencia) afectando asentamientos precarios altamente vulnerables a los impactos del cambio del clima, con deslaves

e inundaciones. Las políticas públicas pueden mejorar la protección civil si abarcan el control de las inundaciones, la infraestructura de protección contra desastres, el alojamiento de evacuados, sistemas de alerta/evacuación, la urbanización controlada y técnicamente apta, además del apoyo estatal a formas de economía popular alternativas. Los países en desarrollo poseen como norma una relación inversamente proporcional entre el grado de afectación a la salud derivado de fenómenos climatológicos, y el nivel de preparación para responder a las cambiantes amenazas sanitarias de ellos derivadas, frenándose el desarrollo humano de las familias pobres, con el consiguiente incremento del riesgo de crisis humanitarias y situaciones de ingobernabilidad.

### **“La proyección del Panel Internacional de Cambio Climático es que los tifones y huracanes se volverán tendencialmente más devastadores, aumentando sus velocidades máximas y precipitaciones”**

Por supuesto, los niveles preexistentes de desarrollo humano y la capacidad que tengan los sistemas de educación, salud pública y seguridad alimentaria, definirán los márgenes de maniobra que tendrán los Estados para afrontar estas nuevas amenazas, destacándose Cuba en ese sentido. Ubicada en un verdadero “corredor de huracanes”, el Estado caribeño ha recibido a lo largo de su historia meteorológica documentada, y hasta este año 2008, el impacto de 115 huracanes, de ellos 31 de gran intensidad.

Como rasgo distintivo, Cuba ha estructurado un sistema de defensa civil altamente eficaz, probado sistemáticamente en los cinco meses de la temporada ciclónica. El control estatal centralizado de la economía y los medios masivos de comunicación, la cobertura nacional del sistema de salud, y los altos niveles de instrucción, cohesión social y cultura solidaria de los cubanos han hecho posible aminorar el impacto material, y las pérdidas de vidas. En esa dirección el desempeño cubano resulta superior no sólo al de vecinos insulares, sino también a las respuestas ofrecidas por las autoridades estadounidenses ante el impacto de huracanes como Katrina.

Reconociendo esos resultados, diversos actores de la cooperación internacional acompañan los esfuerzos de autoridades cubanas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por ejemplo, ha instalado Centros para la Reducción de Riesgos y Sistemas de Alerta Temprana en cuatro provincias y 20 municipios del país, beneficiando a más de 1,2 millones de personas. El pasado 3 de julio de 2008 el PNUD y el gobierno de Cuba pusieron en marcha el Plan de Acción del Programa de País (CIPAP), que regula la cooperación PNUD-Cuba para el período 2008-2012. El CIPAP se imbrica en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Cuba, que estipula los renglones y entorno de trabajo para esta, contemplando cuatro áreas de trabajo: desastres naturales y riesgo; medio ambiente y energía para el desarrollo sostenible; prevención y lucha contra el VIH/SIDA; y desarrollo humano local. Este último rubro se vincula con el tema de la seguridad alimentaria<sup>28</sup>.

Sin embargo, aquello que la contingencia torna idóneo en situaciones límite como huracanes (métodos de trabajo directivos cuasi militares, concentración de recursos y decisiones en pocas manos y tareas clave, alteración brusca de prácticas y demandas de la vida cotidiana de la ciudadanía) pierde calidad cuando entramos en la fase prolongada y difícil de recuperación. Aun valores sólidamente formados por generaciones, ampliamente compartidos a escala nacional, como la solidaridad, son incapaces de sustituir la gestión racional de actores socioeconómicos frente a la demanda insatisfecha de bienes y servicios. La actual coyuntura de crisis alimentaria, a pesar de esfuerzos gubernamentales por acotar la gravedad del impacto, extiende sus efectos sobre esferas de la sociedad y conlleva análisis en los lineamientos del modelo económico, el estado de la base técnico-material y el entorno normativo que sustenta la agricultura cubana, llamada a responder a una demanda de alimentos catalogada como “asunto de seguridad nacional” y “principal tarea del Partido” por la dirección del país.

La actual situación tiene antecedentes históricos y componentes estructurales que trascienden al brutal impacto de huracanes. Las políticas estatales permitieron otorgar atención a necesidades alimentarias básicas de la población, aunque se mantengan brechas entre las expectativas ciudadanas y los resultados productivos, manteniendo diferencias territoriales en la satisfacción. El campo se mecanizó, su trabajo se humanizó y la vida del campesino recibió un integral y considerable vuelco cultural, en la más amplia acepción de este término.

A pesar de los avances desde la década del setenta, la agricultura cubana no alcanzó el nivel de desarrollo requerido para proporcionar suficientes y variados alimentos a la población, llegando a fines de los ochenta a importar aproximadamente el 50% de sus necesidades básicas para el consumo humano, y en la producción de piensos para alimentación animal. La crisis de los años noventa tuvo un impacto muy fuerte en los volúmenes de producción agropecuaria debido a la disminución de la capacidad de compra de insumos (combustibles, fertilizantes, plaguicidas, maquinarias, etc.) para aquel modelo de producción agrícola<sup>29</sup>.

Ya desde inicios de 2002 se evidenció una situación compleja por la recesión de la economía capitalista mundial, y por la devastación causada por el huracán Michelle sobre el 45% del territorio nacional, lo que según cálculos oficiales supuso pérdidas materiales por cerca de 1 mil 800 millones de dólares<sup>30</sup>. Cuando en el primer semestre del 2007, tras un año de debate y por indicación de Raúl Castro, el gobierno liquidó un adeudo con los agricultores privados y las cooperativas, el presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) precisaba tres posibles líneas de acción para mejorar los problemas del agro:

1. Reformas legales para explotar las tierras ociosas;
2. Mecanismos de organización para mejorar la eficiencia y
3. Oferta de combustible, sistemas de riego e insumos para las cooperativas de crédito y servicios<sup>31</sup>.

El hecho es que hoy, con un fondo de tierra cultivable calculado en 6.629.600 hectáreas, el 75% de los suelos presenta diversos niveles de degradación y sólo un 50 % del total está cultivado; hay una profunda descapitalización de empresas del agro y se importa cerca del 80% de los alimentos consumidos<sup>32</sup>. Sumado esto a

que el 15% de los productores (campesinos individuales y Cooperativas de Crédito y Servicios) factura cerca del 60% de los alimentos de consumo frente a las menos eficientes Cooperativas de Producción Agropecuaria (8 a 10%), las híbridas Unidades Básicas de Producción Cooperativas (35-40%) y las languidecientes granjas estatales.

El 15 de abril culminó la constitución de Delegaciones Municipales de la Agricultura, con el objetivo de consolidar un sistema de trabajo integral, cuyo principio básico descansa en el control estatal y la atención a la base productiva. Antecedido con la creación en 2003 de los Delegados Municipales de la Agricultura, el actual reordenamiento supone la disolución de 104 empresas y la reconversión del resto en prestadoras de servicios. Se busca un acercamiento a la base, por lo que el asesoramiento y control deberá llegar a cada productor en el área, ejerciendo facultades legales para rediseñar los planes de acuerdo con las potencialidades de cada lugar, y reconstruir las producciones que sean potencialmente mayores, hacer trámites, etc. Estas estructuras (integradas por el delegado, subdelegados y los especialistas ramales) nombran a los directores estatales (servicio forestal, oficina de control del uso de la tierra y tractores, centro de control pecuario, sanidad vegetal, veterinaria, seguridad y protección) y velan legalmente por la disciplina y la eficacia de esas instituciones.

Sus integrantes serán los responsables de impulsar la fiscalización del fondo de tierra agropecuario y forestal y aplicar las disposiciones legales de la propiedad, posesión y uso de la tierra, entre otras. Las delegaciones representan, además, al Ministerio de Agricultura ante las autoridades políticas y de gobierno en el municipio. Tienen la potestad de modificar los contratos económicos concertados, en los casos donde se compruebe que se han producido transformaciones en los sistemas productivos, dados por factores climáticos, cambios en la estructura de cultivos u otros, que propician niveles de producción superiores a los concebidos inicialmente en la contratación. Son responsables de aplicar medidas disciplinarias a los infractores de lo establecido y de convocar y presidir comisiones de gobierno afines al tema agrario<sup>33</sup>.

### Final del formulario

Algunos críticos valoran carencias en esta medida, como el limitar el usufructo no gratuito a un período prorrogable de 10 años, pues se considera que el esquema puede crear incertidumbre en los interesados, ya que muchos lotes “madurarán” con los años. El nuevo esquema limitaría también la prohibición de construir viviendas en dichos predios y la no inclusión de un usufructo vitalicio transferible a descendientes. El tipo de vínculo entre las Delegaciones Municipales y los Poderes Populares municipales puede crear el peligro de la doble subordinación, a contrapelo de un ideal de vinculación más estrecha con los productores de cada zona, otorgando mayor protagonismo a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, como entidad representantes de aquéllos y contrapartida estatal<sup>34</sup>.

El sociólogo Juan Valdés Paz, al postular que “la agricultura es la actividad más descentralizada...usa la tierra de la localidad, usa la fuerza de trabajo de la localidad, consume el agua de la localidad, y tiene la demanda inmediata de la localidad” valora la necesidad de reconsiderar una descentralización territorial de los servi-

cios y suministros, que amplíe la cantidad de tiendas locales de insumos existentes y los servicios técnicos y sanitarios de base. Apuesta sin embargo por un Acopio (monopolio estatal de recolección y distribución) fortalecido, que debe garantizar la distribución mediante la libreta (de racionamiento), el consumo de instituciones sociales y la destinada a la industria de conservas, asumiendo la compra estable a y de pequeños productores y cooperativas, y brindando al Estado estimados de la producción realmente existente, conciliando su accionar con las señales del mercado.

Calibrando los efectos y experiencias del tortuoso proceso de desmantelamiento (a partir de 2002) de la mayoría de los centrales azucareros existentes, otros autores sugieren la prudencia de una reforma gradual que permita relevar de algunas de sus funciones a Acopio, separando sus esferas de acción local e interprovincial, y dándose entrada a empresarios al transporte de productos agrícolas. Y se señala como promisorio que, a pesar de todas las limitaciones, el 24 de septiembre, ya se habían solicitado más de 445 mil de las 2.005.249 hectáreas de tierras ociosas, la mayoría de estas por ciudadanos que nunca habían poseído parcela alguna<sup>35</sup>. No faltan lecturas radicalmente mercadocéntricas que defienden la eliminación de Acopio, y una profunda reestructuración de la tenencia de la misma que conlleve una completa liberalización del mercado<sup>36</sup>.

Lamentablemente, amén de cualquier debate de diseño institucional y normativo, los huracanes Gustav e Ike hicieron que la producción de hortalizas y condimentos frescos decreciera en 50 mil toneladas métricas en septiembre, en comparación con lo cosechado en agosto, dañándose más de 113.600 hectáreas de cultivos varios, más de un 30% de la superficie sembrada<sup>37</sup>. Si en agosto la comercialización de viandas y hortalizas fue de 5 millones de quintales; en septiembre sólo llegó al millón<sup>38</sup>.

Para contrarrestar la grave situación, el Estado fijó precios tope para el mercado agropecuario privado; realizó (y difundió mediáticamente) juicios contra acaparadores de productos deficitarios (alimentos, medicinas, materiales de construcción) y definió que no se preveían incrementos de precios de bienes de primera necesidad, a pesar del crecimiento generalizado de los costos de las importaciones toda vez que la alimentación del pueblo, junto a la recuperación de la vivienda, la electricidad y demás servicios esenciales se definieron como prioridades del país. A pesar del comprensible (y puntual) apoyo popular a esas medidas, sin dudas constituyen necesarias respuestas de emergencia que deberán dejar paso a los cambios aludidos, en aras de una "reproducción ampliada" del proyecto socialista, garantizando niveles adecuados de gobernabilidad por la vía de la inclusión social.

### **Esbozos de conclusión**

Preservar un conjunto de conquistas de la Revolución, destacándose la noción de derechos sociales efectivos, universales y asimilados como responsabilidad estatal, junto a la aspiración a una creciente participación política de sujetos populares, son condiciones para desplegar una democracia socialista, a 50 años del triunfo popular. Ello supone la necesidad de superar la fragmentación asociativa generada desde la institucionalidad estatal, el fomento de espacios autónomos de organización popular, la reactivación y resignificación de las organizaciones (despoján-

dolas de su socialmente percibida misión de control), el impulso a las formas de democracia laboral, descentralización y gestión participativa de lo local, y una real democratización de las instituciones y organizaciones políticas<sup>39</sup>. Pero también el despliegue de un modelo de desarrollo agrícola ecológicamente virtuoso, integrador de factores productivos, sociales y culturales, que reconozca preferencia a las formas socialistas (no meramente estatales) y la complementariedad de modalidades de propiedad y gestión, y la conformación de redes económicas territoriales que sustenten un desarrollo local armónico y centrado en las necesidades ciudadanas. Al fin de cuentas, el socialismo cubano, vencido el reto de la supervivencia, tiene ante sí la enorme responsabilidad de revitalizarse, como esperanza para la gente de a pie, tanto dentro como fuera de la heroica y hermosa isla. De fracasar, bien podríamos esperar otro medio siglo, pero en este caso huérfanos de proyectos emancipadores y gestionando, derrotados, los magros restos del naufragio.

La Habana y Veracruz, septiembre a noviembre de 2008.

## Notas

1 Esta pesquisa podría abarcar, al menos, cuatro momentos metodológicamente diferenciados: a) los antecedentes mediatos/inmediatos –desde la caída del muro de Berlín y particularmente en el período de Reforma (1992-1997) y contrarreforma (1999-2006); b) la etapa que va desde la delegación del poder por parte de Fidel a un equipo de dirigentes cubanos (agosto 2006-febrero 2008); c) la elección del nuevo gobierno hasta la formación definitiva del nuevo gabinete y la culminación del proceso de reorganización institucional (febrero de 2008-diciembre de 2008); d) la matriz de escenarios posibles, previsibles y deseables.

2 Diego Reynoso 2008 “Sobre las Instituciones Políticas”, en Curso Virtual Gobernabilidad y escenarios prospectivos (Argentina: PNUD/FLACSO).

3 Antonio Camou 2008 “Discusión de los enfoques sobre gobernabilidad”, en Curso Virtual Gobernabilidad y escenarios prospectivos (Argentina: PNUD/FLACSO).

4 Robert Paarlberg 2002 “La gobernabilidad y la seguridad alimentaria en la época de la globalización” en *Resumen No. 72 Una visión de la alimentación, la agricultura y el medio ambiente en el año 2020* (Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias –IFPRI–) febrero.

5 Conjunto de planes e inversiones sociales de variable impacto, inspirados por Fidel Castro y dirigidos centralmente por equipos constituidos al efecto, que tratan de enfrentar problemas y demandas acumulados en los años noventa: desempleo juvenil, falta de personal docente y de salud, pesquisas y servicios médicos de alta tecnología, restauración de centros culturales, ediciones masivas de libros, entre otros. Funcionando paralelamente a (e imbricándose con) los servicios públicos tradicionales, han utilizado grandes montos de recursos del presupuesto na-

cional, a partir de su despliegue en el año 2000.

6 Mauricio Vinent 2007 “La encrucijada de Cuba. La transición invisible” en *El País*, 29 de julio.

7 Armando Chaguaceda 2008 “Derecho a derechos” en <[www.kaosenlared.org](http://www.kaosenlared.org)> 1 de mayo.

8 Se trata de un dato que refiere lo asignado en ciudad de La Habana, ya que el resto de las provincias y especialmente las zonas rurales reciben menos productos. Y en todo el país hay rubros (aseo, grasas, cárnicos, lácteos, verduras, etc.) que deben comprarse en establecimientos del mercado normal.

9 Ver los comentarios finales de mi artículo “Participación ciudadana y espacio asociativo” en Armando Chaguaceda (comp.) 2008 *Participación y espacio asociativo* (La Habana: Editorial Acuario). También Haroldo Dilla 2008 “¿Debatiendo la gobernabilidad en debates gobernables?” en revista *Encuentro* (La Habana: Asociación Encuentro de la Cultura Cubana).

10 Miguel Arencibia 2008 “Cuba: expectativas versus perspectivas?” en <[www.kaosenlared.net/noticia/cuba-expectativas-vs-perspectivas](http://www.kaosenlared.net/noticia/cuba-expectativas-vs-perspectivas)> 10 de agosto.

11 Emblemáticamente representados por las asambleas de la Agencia de Contratación a Representantes Comerciales (aglutinadora de empleados de empresas extranjeras) y la Universidad de Ciencias Informáticas (estudiantes selectos de ciencias informáticas), cuyas grabaciones de audio y video circularon ampliamente por la red, dentro y fuera de Cuba. Se trata de sectores de alta confiabilidad política y cercanía al poder, lo que revela la amplitud de las demandas para una reconfiguración socialista participativa de la agenda política nacional, que logre dar cuenta de las diversas aspiraciones individuales y grupales.

12 Hernán Yanes 2008 “La tensión entre estancamiento y renovación. El régimen cubano después de la ‘Proclama de delegación temporal’ de pode-

res de mediados de 2006" en *Escenarios de transición en Cuba* (México DF: Konrad-Adenauer-Stiftung A.C.) mayo.

13 Las presiones ejercidas por estos desequilibrios sobre los tipos de cambio amenazan, entre otros factores, la estabilidad monetaria.

14 Esta alude, según P. Monreal, a cambios específicos en las instituciones que definen los mecanismos de coordinación, organización, relaciones de propiedad y flujos de retroalimentación de la economía, la cual requiere, para ser implementada, plazos menores a los de un cambio estructural.

15 Pedro Monreal 2008 "El problema económico de Cuba" en *Espacio Laical* N° 28 (La Habana) abril; Omar Everleny 2008 "La economía en Cuba: un balance necesario y algunas propuestas de cambio" en *Nueva Sociedad* N° 216 (Buenos Aires: Fundación Friedrich Ebert) julio-agosto; Pavel Vidal 2008 "La disyuntiva actual de la política económica cubana" en *Opinión Especializada del Economics Press Service* N° 18 (La Habana, IPS) 30 de septiembre.

16 La contabilización de los daños en el PIB es compleja, en tanto la reconstrucción sumaría valores a este.

17 En 2007 representó 3,2% del PIB.

18 Carlos Manuel Rodríguez 2008 "Elecciones en Cuba 2008: rutinización del carisma y escenarios de transición democrática", ponencia presentada en el IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP), Costa Rica, <<http://alacip2008.programacientifico.info/programa/buscar.php>>.

19 Haroldo Dilla 2008 "La dirección y los límites de los cambios" en *Nueva Sociedad* N° 216 (Buenos Aires: Fundación Friedrich Ebert) julio-agosto.

20 El vicepresidente Esteban Lazo, en una reunión del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la provincia de Matanzas, el 17 de junio de 2008, llamó a trabajar "con disciplina" y "mayor eficiencia" para aumentar la producción de alimentos, disminuir las importaciones como "la estrategia fundamental del país y la mayor contribución que puede hacer hoy el Partido para salvar el socialismo". Durante la Asamblea Provincial del PCC en la provincia de Santiago de Cuba, a finales de julio de 2008, el primer vicepresidente, José Ramón Machado Ventura, mencionó "la baja productividad de las fuerzas, falta de exigencia, ausentismo y el descontrol existente en no pocas entidades" como factores responsables de los "insuficientes niveles productivos" en el sector agropecuario de la provincia, más allá de la limitación de recursos.

21 Yanes, op. cit.

22 Yanes, op. cit. Ver en dicho libro el texto "Alternativas de futuro en Cuba" de Juan J. López, donde una propuesta de 4 escenarios excluye la posibilidad de mejoras sustantivas fuera de la opción demoliberal y el "acercamiento" a EEUU.

23 Gerardo Arreola 2008 "En juego, un nuevo modelo del socialismo en Cuba, entrevista a Rafael

Hernández" en *La Jornada* (México DF) 29 de noviembre.

24 Al ser poco probable una fragmentación en la élite política (duros versus reformistas) ello puede servir tanto para paralizar los cambios (de prevalecer los aparátchiki) como para impedir una "modernización conservadora", socialmente regresiva, que entregue el país a las trasnacionales sin activa mediación estatal, como sugerirían los sueños de no pocos tecnócratas del patio.

25 Rafael Hernández 2008 "El reto, un nuevo modelo", en revista *Procesos* N° 1634 (México DF) 24 de febrero. Otro enfoque, esencialmente compartido por este autor, es el que esboza Carlos Alzugaray en "Una aproximación desde la Isla. El ser y el devenir político de Cuba en los albores del siglo XXI" publicado en el "Dossier Cuba el cambio a debate" de la revista *Encuentro* (México DF: Asociación Encuentro de la Cultura Cubana) en 2008. Muy sugerentes resultan algunos criterios vertidos en "Sobre la transición socialista en Cuba: un simposio", en revista *Temas*, N° 50-51, abril-septiembre de 2007.

26 "Crisis climáticas: riesgo y vulnerabilidad en un mundo desigual" en *Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008*, PNUD.

27 ídem.

28 Ver <http://www.undp.org/cu/>.

29 Marcos Nieto y Ricardo Delgado "El sector agrario y la seguridad alimentaria" en <[http://www.desal.org.mx/article.php3?id\\_article=19](http://www.desal.org.mx/article.php3?id_article=19)>.

30 Haroldo Dilla 2003 "La gobernabilidad en la transición incierta de Cuba" en revista *Envío* N° 255 (Managua: Universidad Centroamericana) junio.

31 Gerardo Arreola 2007 "El mandato provisional de Raúl Castro abre intenso debate económico en Cuba" en *La Jornada* (México DF) 25 de julio.

32 De EEUU se han importado —en las circunstancias excepcionales abiertas tras el huracán Michelle— en diciembre de 2001, 4,4 millones de dólares; en el 2002, 173,6 millones de dólares; en el 2003, 327 millones; en el 2004, 434,1 millones; en el 2005, 473 millones; en el 2006, 483,3 millones; en el 2007, 515,8 millones, y en el 2008, 425 millones en el primer semestre del año. Ver Castro, Fidel 2008 "Dos veces la misma mentira" en diario *Granma* (La Habana) 19 de septiembre.

33 *Juventud Rebelde* 2008 "Tras las fórmulas para garantizar la seguridad alimentaria", 1 de junio.

34 Arencibia, op. cit.

35 José Álvarez y G.B. Hagelberg 2008 "¿Un callejón sin salida? La agricultura en crisis", en revista *Encuentro* (México DF: Asociación Encuentro de la Cultura Cubana).

36 Yanes, op. cit.

37 Raisa Pagés 2008 "No aumentará oferta agrícola hasta fines de año", en diario *Granma* (La Habana) 21 de octubre.

38 *Granma* 2008 "Cuba evalúa disposiciones para mitigar desabastecimientos" (La Habana) 3 de octubre.

39 Julio César Guanche 2008 "La autogestión del futuro", ponencia inédita presentada en Belén do Pará, Brasil, en el verano. También Haroldo Dilla 2008 "La dirección y los límites de los cambios", en revista *Nueva Sociedad* No 216 (Buenos Aires:

Fundación Friedrich Ebert) julio-agosto; y Armando Chaguaceda 2008 "La ley y el desorden: lecturas desde la sociedad incivil", en revista *Alma Mater* (La Habana) octubre.